

especial para *El Financiero*, edición del 2 de julio de 1992
Cuotas y amenazas
miguel ángel granados chapa

Entrevistado ayer por la mañana por José Gutiérrez Vivó, para el *Monitor*, de Radio Red, el rector José Sarukhán reflejaba un dolorido desaliento. Como hombre inteligente que es, sabía, y lo expresaba, que la vida de la Universidad Nacional no se agota en el tema de las cuotas, y por lo tanto habló de los rumbos a los que por ahora orientará sus afanes. Pero sonaba descorazonado, acaso porque se le había impuesto una consideración mayor que la necesidad de dotar de nuevos recursos a la UNAM. Se le impuso no en el sentido de que alguien hubiera sobrepuesto su criterio al del jefe nato de la Universidad. No. Lejos de eso. Pero el rector no pudo sustraerse a razonamientos e informes sobre el entorno nacional que se agregaron a los que, respecto de la propia institución, poseía el rector. Y por eso resolvió aplazar su decisión de fijar cuotas reales por los servicios educativos que imparte la Universidad.

La causa de esa triste decisión es, si cabe, de mayor importancia que el efecto. Este consiste no sólo en que la principal institución de enseñanza universitaria del país se quede sin nuevos recursos, que tanto le faltan. No sólo en que ella sea desprovista de un argumento frente al neoliberalismo que la ha sometido a una política mezquina, disfrazada de austeridad. No sólo en que se dificulte la adopción de medidas audaces que cuenten con el consenso de un amplio número de universitarios, y parezca que basta la acción resuelta de un sector minoritario para frenar decisiones de interés general.

Es de mayor importancia la causa, porque suponemos que descansa en un diagnóstico de las desazones y conflictos que se avecinan, y que son una amenaza para la convivencia. Aparentemente, se resolvió no agregar el litigio que desencadenaría el establecimiento de nuevas cuotas universitarias, a otros que están ya en curso o próximos a manifestarse como tales.

Es claro que condiciones internas de la UNAM no fueron ajenas al aplazamiento del asunto que más ha ocupado a los universitarios en los meses recientes. La movilización en contra conseguida por el Consejo Estudiantil Universitario y fuerzas afines, fue mayor de lo que las autoridades esperaban. Y en cambio fue menor de lo previsto el entusiasmo con que algunos directores de escuelas y facultades enfrentaron el paro del jueves 25. Y es que, a seis meses de la elección de un nuevo rector (o la reelección de Sarukhán) se avivan los intereses específicos de autoridades movidas por visiones escolares y políticas no siempre identificadas con las del rector.

Pero el peso que inclinó la balanza en contra de la ya costosa decisión del rector vino de fuera. Conforme al programa de la reforma al reglamento de pagos, dentro de dos semanas a más tardar el Consejo Universitario habría adoptado la resolución respectiva. La inconformidad que el CEU ya había anunciado adquiriría entonces una virulencia que el diagnóstico exterior a la situación de la UNAM midió como insoportable, no en sí mismo, sino en combinación con otros factores. Como la reacción ciudadana ante el proceso y los resultados electorales en Michoacán y Chihuahua, cuya emisión del voto se efectuará el 12 de julio.

En ese punto la prognosis se hace ominosa. Significa que se considera factible una movilización de sectores partidarios en torno de esos comicios. Por sus propias características, el partido gubernamental es controlable, y si sus candidatos pierden las elecciones, se pueden hallar fácilmente recursos para impedir expresiones de descontento, o someterlas con rapidez a límites manejables. No es así. necesariamente, con la oposición. Y menos si ésta actúa impulsada por la convicción de que defiende derechos conculcados. La contienda electoral en Michoacán y Chihuahua es realmente una disputa por el gobierno, no mero fuego de artificio. El PAN y el PRD buscan realmente las gubernaturas. No lo hacen en condiciones de igualdad con el PRI, pues éste los avasalla de varias maneras. Pero se sobreponen a sus desventajas y pese a ellas pueden obtener el triunfo. Se observan, por consecuencia, aprestos del gobierno y su partido para evitar que eso ocurra, especialmente en Michoacán, donde se han multiplicado los esfuerzos priístas por hacer crecer y consolidar una candidatura chica y fofa.

Dicho de otro modo, se percibe la decisión de ganar a como haya lugar. Y por consiguiente, se prevé que el descontento de quienes sean afectados por tal decisión, se vuelque a las calles y adquiera formas de protesta activas como las practicadas en Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco el año pasado. Tal movilización, combinada con la resultante de incrementar las cuotas universitarias (y con otros factores). podría transformarse en material inflamable. De allí que se resolviera no aportar el pábulo del conflicto universitario.

Con tal actitud perdemos todos. Pierde la Universidad, pues deja ir una valiosa ocasión de ejercer en su propio provecho su aptitud para el autogobierno. Y pierde la sociedad, pues se la expone a riesgos y quebrantos por mantener el monopolio de las gubernaturas, o un oligopolio cuyos miembros sean escogidos y aceptados sólo si no pertenecen al PRD.

Deseemos, sin embargo, que se trate en verdad de sólo un aplazamiento y no de una cancelación.

Cuotas y Amenazas

Miguel Angel Granados Chapa

Entrevistado ayer por la mañana por José Gutiérrez Vivó, para el Monitor, de Radio Red, el rector José Sarukhán reflejaba un dolorido desaliento. Como hombre inteligente que es, sabía, y lo expresaba, que la vida de la Universidad Nacional no se agota en el tema de las cuotas, y por lo tanto habló de los rumbos a los que por ahora orientará sus afanes. Pero sonaba descorazonado, acaso porque se le había impuesto una consideración mayor que la necesidad de dotar de nuevos recursos a la UNAM. Se le impuso no en el sentido de que alguien hubiera sobrepuesto su criterio al del jefe nato de la Universidad. No. Lejos de eso. Pero el rector no pudo sustraerse a razonamientos e informes sobre el entorno nacional que se agregaron a los que poseía respecto de la propia institución. Y por eso resolvió aplazar su decisión de fijar cuotas reales por los servicios educativos que imparte la Universidad.

La causa de esa triste decisión es, si cabe, de mayor importancia que el efecto. Este consiste no sólo en que la principal institución de enseñanza universitaria del país se quede sin nuevos recursos, que tanto le faltan. No sólo en que ella sea desprovista de un argumento frente al neoliberalismo que la ha sometido a una política mezquina, disfrazada de austeridad. No sólo en que se dificulte la adopción de medidas audaces que cuenten con el consenso de un amplio número de universitarios, y parezca que basta la acción resuelta de un sector minoritario para frenar decisiones de interés general.

Es de mayor importancia la causa, porque suponemos que descansa en un diagnóstico de las desazones y conflictos que se avecinan, y que son una amenaza para la convivencia. Aparentemente, se resolvió no agregar el litigio que desencadenaría el establecimiento de nuevas cuotas universitarias, a otros que están ya en curso o próximos a manifestarse como tales.

Es claro que condiciones internas de la UNAM no fueron ajenas al aplazamiento del asunto que más ha ocupado a los universitarios en los meses recientes. La movilización en contra conseguida por el Consejo Estudiantil Universitario y fuerzas afines, fue mayor de lo que las autoridades esperaban. Y en cambio fue menor de lo previsto el entusiasmo con que algunos directores de escuelas y facultades enfrentaron el paro del jueves 25. Y es que, a seis meses de la elección de un nuevo rector (o la reelección de Sarukhán) se avivan los intereses específicos de autoridades movidas por visiones escolares y políticas no siempre identificadas con las del rector.

Pero el peso que inclinó la balanza en contra de la ya costosa decisión del rector vino de fuera. Conforme al programa

de la reforma al reglamento de pagos, dentro de dos semanas a más tardar el Consejo Universitario habría adoptado la resolución respectiva. La inconformidad que el CEU ya había anunciado adquiriría entonces una virulencia que el diagnóstico exterior a la situación de la UNAM midió como insoportable, no en sí mismo, sino en combinación con otros factores. Como la reacción ciudadana ante el proceso y los resultados electorales en Michoacán y Chihuahua, cuya emisión del voto se efectuará el 12 de julio.

En ese punto la prognosis se hace ominosa. Significa que se considera factible una movilización de sectores partidarios en torno de esos comicios. Por sus propias características, el partido gubernamental es controlable, y si sus candidatos pierden las elecciones, se pueden hallar fácilmente recursos para impedir expresiones de descontento, o someterlas con rapidez a límites manejables. No es así, necesariamente, con la oposición. Y menos si ésta actúa impulsada por la convicción de que defiende derechos conculcados. La contienda electoral en Michoacán y Chihuahua es realmente una disputa por el gobierno, no mero fuego de artificio. El PAN y el PRD buscan realmente las gubernaturas. No lo hacen en condiciones de igualdad con el PRI, pues éste los avasalla de varias maneras. Pero se sobreponen a sus desventajas y pese a ellas pueden obtener el triunfo. Se observan, por consecuencia, aprestos del gobierno y su partido para evitar que eso ocurra, especialmente en Michoacán, donde se han multiplicado los esfuerzos priistas por hacer crecer y consolidar una candidatura chica y fofa.

Dicho de otro modo, se percibe la decisión de ganar a como haya lugar. Y por consiguiente, se prevé que el descontento de quienes sean afectados por tal decisión, se vuelque a las calles y adquiera formas de protesta activas como las practicadas en Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco el año pasado. Tal movilización, combinada con la resultante de incrementar las cuotas universitarias (y con otros factores), podría transformarse en material inflamable. De allí que se resolviera no aportar el pábulo del conflicto universitario.

Con tal actitud perdemos todos. Pierde la Universidad, pues deja ir una valiosa ocasión de ejercer en su propio provecho su aptitud para el autogobierno. Y pierde la sociedad, pues se la expone a riesgos y quebrantos por mantener el monopolio de las gubernaturas, o un oligopolio cuyos miembros sean escogidos y aceptados sólo si no pertenecen al PRD.

Deseemos, sin embargo, que se trate en verdad de sólo un aplazamiento y no de una cancelación.